

Cinco macrosumarios, cuatro tribunales diferentes y la sombra de corrupción sistémica cercan a una de las 'joyas de la corona' del Estado

El 'holding' dependiente del Ministerio de Hacienda mueve más de 7.000 millones anuales y sostiene a casi 87.000 empleados

Díez y Antxon Alonso—, con el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, como el presunto pilar. Una estructura definida como un nexo de influencia permanente para moldear voluntades públicas a favor de intereses privados.

Las pruebas recabadas por los agentes de la UCO de la Guardia Civil son consistentes. El 6 de julio de 2021, dos semanas antes de que el Consejo de Ministros aprobara el auxilio a la siderúrgica vasca Tubos Reunidos, una anotación encendía las alarmas: «Pese a la promesa de la presidenta de la SEPI... Los 112,8 millones de euros comprometidos por la SEPI están en el aire». El plan inmediato pasaba por que Antxon Alonso, dueño de Servinabar, jugará la baza del PNV demostrándole que manejaba información confidencial de la sociedad pública. La presunta red buscaba forzar una presión directa de los nacionalistas sobre Moncloa para desatascar los fondos. Catorce días después, el 20 de julio, el dinero fue aprobado.

Ese rescate es la principal fuga de agua para Gualda. La Fiscalía sostiene que Vicente Fernández, tras dejar la presidencia de la SEPI, retuvo sus terminales de acceso obteniendo ilícitamente datos reservados del expediente para filtrarlos a los directivos de Tubos Reunidos. El peaje por este 'lobby' se camufló mediante 21 facturas falsas de «prospección de mercados» emitidas a Mediaciones Martínez, firma vinculada a la red, por valor de

114.959 euros. El sumario ya eleva el rastro de las comisiones en torno a la siderúrgica vasca a 247.459 euros, con citas de alto voltaje, como la celebrada en Ferraz el 13 de noviembre de 2024 entre Cerdán, Díez, Fernández y los jefes de la empresa.

Favor extra a Tubos Reunidos

«Julián Mateos → SEPI». Esta es otra de las pruebas claves. La nota manuscrita apareció en la agenda intervenida al exdirigente socialista en Ferraz y condensa el tramo final del plan. Julián Mateos-Aparicio, director del FASEE y Promoción Empresarial, engrosa la lista de imputados. El 28 de marzo de 2025 firmó, delegándolo Gualda, la autorización para que Tubos aplazara una amortización obligatoria y dispusiera de casi 10 millones de la venta de un inmueble en la localidad vizcaína de Sestao. Anticorrupción afirma que, por este favor extra, Vicente Fernández se embolsó otros 40.000 euros más IVA.

Él, Fernández, fue el primero de la cadena de encausados. Llegado a la SEPI de la mano de María Jesús Montero (madrina también de Gualda), dimitió en octubre de 2019 tras ser investigado por Aznalcóllar, causa de la que fue absuelto. En diciembre de 2025 la UCO lo detuvo junto a Leire Díez y Alonso. Para el fiscal, Hirurok funcionaba como una maquinaria estable que operaba sobre expedientes de Mercasa, Enusa, Tubos Reunidos, el Parque Empresarial Principado de Asturias y Forestalia, desviando fondos hacia Mediaciones Martínez, Servinabar o Next Generation Caliope Innova.

Entre Fernández y Gualda emergió Bartolomé Lora, quien pilotó el 'holding' en funciones durante más de 500 días y hoy sigue como vicepresidente, imputado en el Juzgado de Instrucción 49 de Madrid por prevaricación administrativa por el rescate de 475 millones de euros a Air Europa, la aerolínea de los Hidalgo. Las denuncias torpedean la operación cuestionando el cumplimiento de las condiciones del FASEE, la tramitación exprés y la clamorosa falta de controles.

Sánchez en el PSOE y señalado en el sumario de Pedraz dentro de la 'cloaca' de Ferraz. En Enusa aterrizó como presidente, con un suelo anual de 245.000 euros, Mariano Moreno, exgerente de la dirección federal de los socialistas. Moreno, que ya ha desfilado ante la instrucción y el Supremo por los sobres de dinero en efectivo para el exministro José Luis Ábalos y su asesor, Koldo García, es hoy una pieza central en la pieza secreta del juez Ismael Moreno sobre las finanzas de Ferraz. El broche lo pone Jéssica Rodríguez, expareja de Ábalos, que acaba de ser imputada

tras admitir en el Tribunal Supremo que cobró de las filiales públicas Tragsatec e Ineco sin trabajar.

La riada de fango con la SEPI alcanza incluso el corazón de Moncloa. Víctor de Aldama aseguró ante el Supremo que Koldo García le obligó a retirar una oferta de 250 millones de euros por el complejo 'Campos Velázquez' —un caramelo inmobiliario de 43.000 metros cuadrados propiedad de Sepides (entidad adscrita a la SEPI) en la confluencia con María de Molina— porque la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, «lo quería para ella».



Juanma Moreno, ayer en su toma posesión como presidente de la Junta de Andalucía. E.P.

Moreno asegura, tras el pacto con Vox, que la 'vía andaluza' sigue viva

El presidente de la Junta advierte en su toma de posesión que la legislatura será larga y fructífera «o no será»

HÉCTOR BARBOTTÀ
Sevilla

Juanma Moreno quiso arrancar su tercer mandato al frente de la Junta de Andalucía ofreciendo la garantía de que los principios políticos que han marcado su trayectoria siguen vigentes. En su discurso de toma de posesión, afirmó de forma tajante que la «vía andaluza» continúa viva a pesar de los condicionantes impuestos por el pacto parlamentario con Vox.

El reelegido presidente andaluz quiso disipar cualquier duda sobre un posible endurecimiento de su agenda ideológica o un viraje hacia posiciones extremas y advirtió con total claridad a todas las fuerzas políticas de que esta nueva legislatura que ahora comienza «será larga y fructífera o no será». Con este aviso directo a navegantes, intentó fijar las reglas del juego de un mandato en el que aspira a que el diálogo y el pragmatismo vuelvan a ser los ejes vertebradores. Su obligación principal, dijo, será gobernar para todos los andaluces, sin distinción de siglas ni de bloques.

En una intervención de marcado carácter estratégico y de calado or-

gánico, el mandatario insistió en que mantendrá intacto su perfil moderado y centrista. «Voy a ser fiel a mí mismo y al modelo que ha hecho de Andalucía en estos años una comunidad más próspera, un referente de estabilidad, seguridad y también de entendimiento», proclamó para intentar despejar los recelos que despierta la influencia de sus socios de investidura.

Moreno defendió que «los valores no cambian» por las coyunturas numéricas y definió la identidad de su proyecto como una fórmula netamente inclusiva, transversal y diametralmente opuesta a los bloqueos institucionales que tensionan la política nacional: «La vía andaluza es el sí, el sí al acuerdo, a la proximidad entre todos y ha sido siempre contraria a los cordones sanitarios». Bajo esta premisa de centralidad, remarcó que en el proyecto común de la comunidad caben todos los ciudadanos, independientemente de su opción en las urnas.

El líder del Ejecutivo autonómico respaldó su argumentación echando la vista atrás y reivindicando el espíritu del año 2019, cuando un «gran acuerdo a tres bandas» permitió el primer relevo político en la historia de la comunidad. Según Moreno, aquella alianza demostró el inmenso valor de la concordia y abrió una etapa de acuerdos leales que ha permitido el crecimiento sin precedentes de la riqueza, la innovación y el empleo, sacando a Andalucía de lo que ha denominado como el desen-

canto estructural. Aunque reconoció abiertamente que los consensos parlamentarios y las coaliciones «muchas veces no le gustan ni a quienes los firman», defendió que el entendimiento forma parte inseparable de la esencia democrática y representa la única herramienta válida para ofrecer certidumbre frente a un entorno exterior de hostilidad, inestabilidad y permanente enfrentamiento partidista.

Más allá del plano puramente discursivo, el diseño del acto, al que estuvo vetado el ingreso de la prensa, reflejó las complejas e incómodas relaciones institucionales que mantiene San Telmo con las diferentes administraciones públicas del Estado. La ceremonia, desarrollada con todo el boato protocolario en los jardines del Palacio de San Telmo, contó con la presencia de figuras de peso como el expresidente del Gobierno de la nación, Mariano Rajoy, y la expresidenta de la Junta de Andalucía, la socialista Susana Díaz. El Gobierno de España optó por enviar una delegación institucional de segunda fila, integrada por la secretaria de Estado de Política Territorial, Miryam Álvarez, y el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, aunque sí asistió la portavoz socialista, María Jesús Montero. Este perfil marcadamente bajo por parte de Moncloa coincidió con las exigencias del propio Moreno, quien aprovechó para reclamar abiertamente suficiencia financiera y un trato justo en la distribución de recursos.